

RESUMEN DEL TRIMESTRE

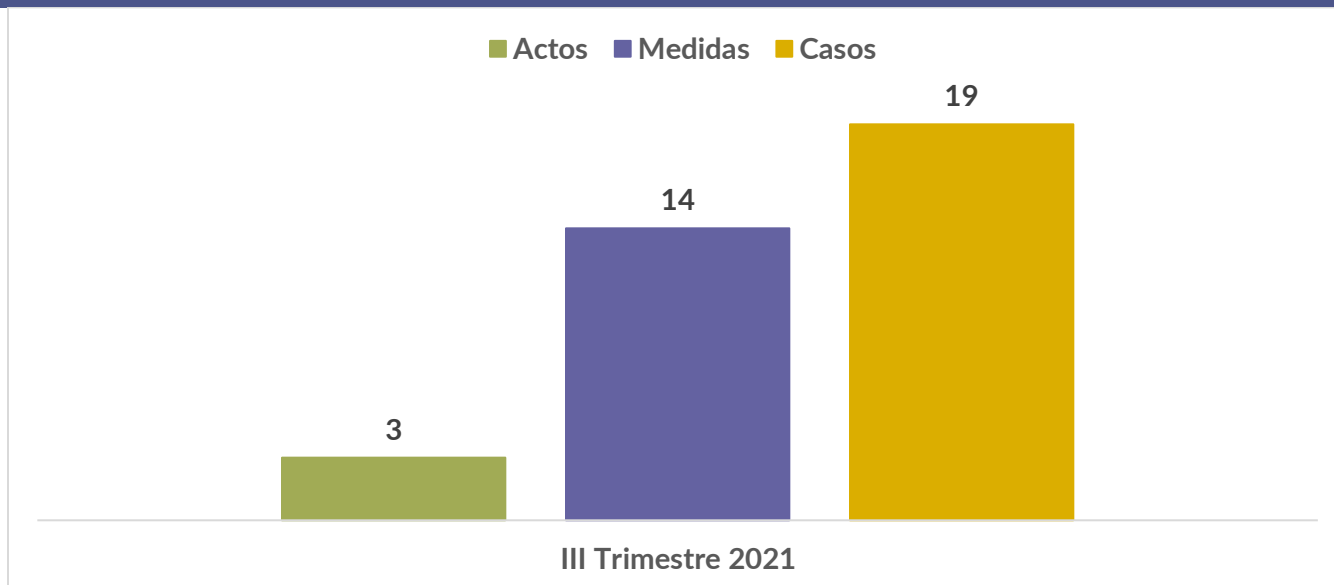
En el tercer trimestre de 2021 (julio-septiembre) bajaron a 36 los eventos registrados, después de un alza en el trimestre anterior. Los eventos se clasificaron en 19 casos, 14 medidas y 3 actos de vulneración de los derechos a la libertad de asociación, participación y defensa de los derechos humanos, principalmente. Estos eventos afectaron el espacio cívico, manteniéndose igual los entornos de ausencia de Estado de Derecho y justicia, y falta de reconocimiento y protección de la sociedad civil. Fueron más afectadas las ONG y los partidos políticos. En los eventos intervinieron autoridades judiciales, electorales y legislativas, y cuerpos de seguridad del Estado.

El Boletín de Monitor Cívico es una publicación trimestral de Civilis Derechos Humanos para presentar los resultados del monitoreo de eventos que representan amenazas o en los cuales han ocurrido hechos de vulneración de derechos de la sociedad civil y de entornos de un espacio cívico abierto y seguro en Venezuela, evaluados de acuerdo con estándares del derecho internacional.

Los eventos se clasifican en a) actos, que comprenden acciones o alocuciones de actores estatales y no estatales; b) medidas, ejecutivas, legislativas, judiciales y administrativas que toman órganos del Estado; y c) casos de personas, grupos u organizaciones víctimas de las vulneraciones.

[Glosario](#)

EVENTOS REGISTRADOS



[Tablero de Datos](#)



DERECHOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

Los defensores José Javier Tarazona, Omar García y Rafael Tarazona de la organización Fundaredes, fueron detenidos cuando salían del Ministerio Público en el estado Falcón por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Después de 30 horas desaparecidos un tribunal de terrorismo en Caracas les acusó de delitos de incitación al odio, traición y terrorismo. Además, fue allanada la sede de Fundaredes y las residencias de miembros de la organización. También fue detenido Jhonny Romero del Comité Nacional de Víctimas de las Desapariciones Forzadas en las Costas de Venezuela (Confavit), puesto en libertad. En el sistema de medios públicos se acusó a organizaciones de operar con bandas paramilitares. Varias sufrieron intentos de hackeo de sus sitios web y ocurrieron ataques contra periodistas por informar sobre las lluvias en el estado Mérida. El Ejecutivo ordenó restricciones estrictas a las redes sociales por la suspensión de Twitter a la cuenta del Programa “Con el mazo dando”. El SEBIN y cuerpos policiales estuvieron presentes en protestas por derechos a la salud y de las mujeres. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la intervención de elecciones en un conjunto residencial, bajo el pretexto de insolvencia de propietarios. El Consejo Nacional Electoral (CNE) descartó que el TSJ devolviera tarjetas a partidos políticos intervenidos.

	Total	Actos	Medidas	Casos
Libertad de asociación	26	2	7	17
Libertad de reunión pacífica	4	1	2	1
Libertad de expresión	5	0	3	2
Derecho a la participación	22	1	7	14
Derecho a la defensa de derechos	18	1	9	8

ENTORNOS DEL ESPACIO CÍVICO

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatora Especial sobre defensores de las Naciones Unidas manifestaron preocupación por la aplicación de normas contra el terrorismo a las organizaciones de la sociedad civil con intenciones intimidatorias. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló en su segundo informe sobre Venezuela que el proyecto de Ley de Cooperación Internacional establecía limitaciones exacerbadas a las ONG, y recomendó al Estado evitar la adopción de leyes y regulaciones desproporcionadamente restrictivas de las libertades fundamentales y del espacio cívico. Pese al cese de las funciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se aprobó una Ley Constitucional para mantener vigentes sus actos y medidas, incluyendo la Ley contra el Odio, que afecta a las organizaciones de la sociedad civil. Un Panel de Expertos rechazó el pedido de control judicial del Estado venezolano sobre la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) de continuar la investigación sobre Venezuela.

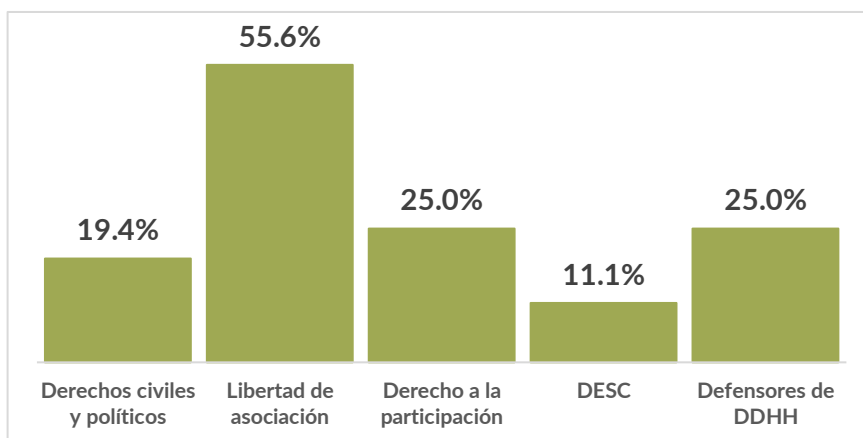
	Total	Actos	Medidas	Casos
Entorno de reconocimiento y protección	32	3	11	17
Entorno de información y conectividad	1	0	1	0
Entorno de acceso a recursos y apoyo a largo plazo	1	0	1	0
Entorno de participación y democracia	6	0	2	4
Entorno de Estado de Derecho y justicia	36	3	14	19



INDICADORES CLAVE

El 56% de los eventos que fueron registrados se relacionaron con temas en libertad de asociación y 50% con el derecho a la participación y a defensa de los derechos humanos. Los sectores de la sociedad civil más afectados fueron las organizaciones de derechos civiles y políticos (33,3%), las políticas (22,2%), las laborales (8,3%), así como las organizaciones comunitarias y las de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (5,6% cada una). El 42% de los eventos tuvo la intención de inhabilitar, 25% de intimidar y 17% fueron represalias. En estos eventos actuaron autoridades judiciales, electorales y legislativas, y cuerpos de seguridad del Estado, afectando a las personas defensoras, víctimas de violaciones de derechos, miembros de las ONG, mujeres activistas y defensoras, asociaciones de vecinos, usuarios de las redes sociales, periodistas, dirigentes y militantes de partidos políticos.

Temas de derechos con mayores vulneraciones

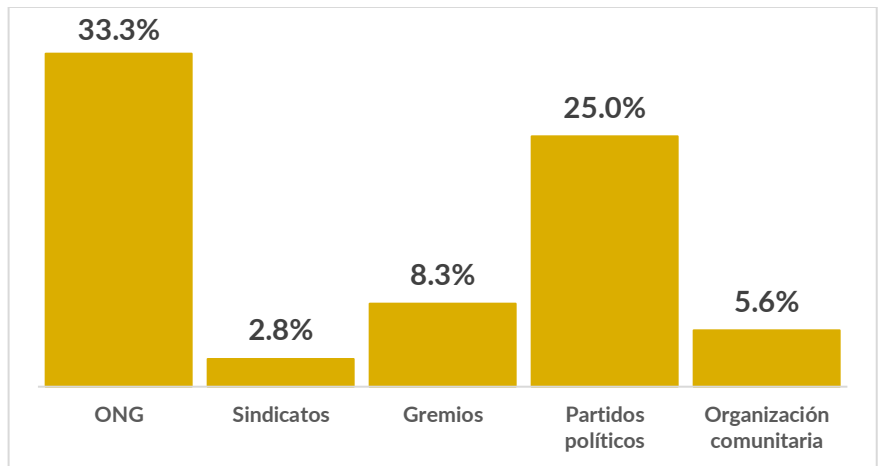


Sectores de organizaciones de sociedad civil vulneradas

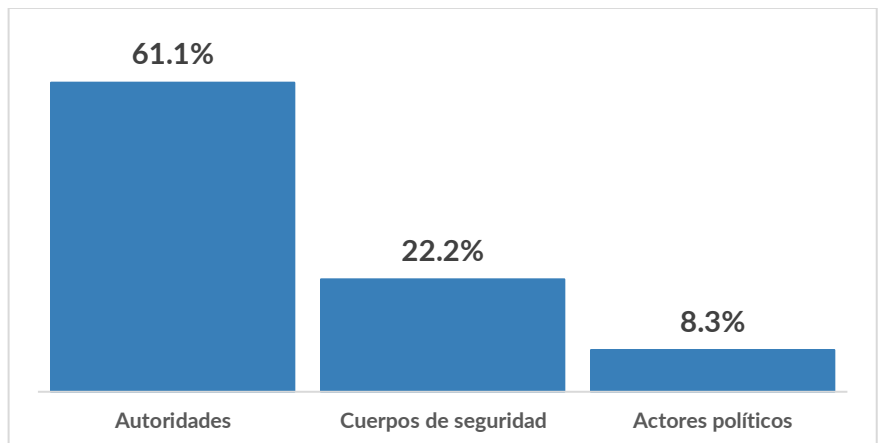




Perfiles de organizaciones de sociedad civil vulneradas



Actores involucrados en vulneraciones



Intenciones identificadas en vulneraciones

